

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para la realización de un diagnóstico integral del sistema de protección social en Argentina

Argentina

AR-T1253

Apoyo al Desarrollo de Políticas de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Argentina.

1. Antecedentes y Justificación

1.1. Resumen de los antecedentes

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o " Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

La recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de los pisos nacionales de protección social establece cuatro garantías básicas: (i) acceso a servicios de atención de salud esencial, (ii) seguridad básica del ingreso para los niños, que asegure acceso a la alimentación, educación y cuidados, (iii) seguridad básica del ingreso para personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes (por desempleo, subempleo, invalidez, u otros motivos), (iv) seguridad básica del ingreso para personas de edad. En el caso de la población en edad de trabajar, es necesario que las estrategias de extensión de la protección social se articulen con políticas para promover el empleo formal. El piso de protección puede pensarse como parte de un sistema integral: abarca las garantías básicas a las que accede toda la población y constituye la base sobre la que se desarrollan, por ejemplo, los seguros sociales que cubren a los trabajadores formales. Un aspecto que destaca la recomendación 202 es asegurar la sostenibilidad fiscal de los pisos de protección social.

En diciembre de 2020, el BID aprobará la Cooperación Técnica “Apoyo al Desarrollo de Políticas de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Argentina” (AR-T1256). El objetivo principal de esta cooperación técnica es apoyar en el desarrollo de insumos analíticos que puedan informar la toma de decisiones y la formulación de políticas sociales efectivas, eficientes, y sostenibles para garantizar un piso de ingreso a personas en edad, así como en el fortalecimiento de registros, sistemas de información e integración de bases de datos que permitan diseñar y monitorear la implementación de una estrategia de transferencias para avanzar hacia el piso protección social.

1.2. Justificación de la existencia de este proyecto

El gobierno nacional dispone de un conjunto programas no contributivos para garantizar la seguridad básica de un ingreso en la niñez (asignación universal por hijo, AUH y asignación universal por embarazo, AUE) y en la vejez (pensión universal para el adulto mayor, PUAM), así como de otros instrumentos de protección social para asegurar un piso de bienestar a personas en edad activa sin empleo formal y con ingresos insuficientes o en situación de vulnerabilidad social. Algunos de esos instrumentos se implementaron en 2020 como respuesta a la emergencia

social (ingreso familiar de emergencia, IFE o la tarjeta alimentar, TA) y otros forman parte del sistema de protección social surgido en los últimos diez años, como las pensiones no contributivas por invalidez (PNC), el programa Potenciar Trabajo (PT), o el programa Progresar.

En conjunto, los programas no contributivos destinados a garantizar un piso de ingreso a personas entre 18 y 65 años sin empleo formal tienen una cobertura importante: el IFE alcanza aproximadamente a 8,9 millones de trabajadores informales y cuentapropistas de bajos ingresos (categorías A y B), las PNC cubren a 1 millón de beneficiarios en situación de vulnerabilidad social e invalidez laboral, mientras que PT y Progresar tienen cerca de 500.000 titulares cada uno. A esto se suman otras iniciativas nacionales de menor alcance, que también apuntan a población adulta con dificultades para acceder a empleos o generar ingresos suficientes, como el programa de jóvenes por más y mejor trabajo (62.000 destinatarios), entre otros.

Como consecuencia del relajamiento de las medidas de aislamiento y la reapertura progresiva de actividades, así como la incipiente recuperación económica esperada para 2021 en el escenario post-COVID, parte de los beneficiarios actuales del IFE probablemente retome sus actividades laborales y ya no requieran de transferencias para alcanzar un piso de ingreso. Lo anterior supone un cambio respecto del contexto en el que se formuló el IFE. Sin embargo, la profundidad de la crisis y su alcance global implicarán impactos duraderos en el mercado de trabajo, por lo que un importante grupo de personas continuará necesitando apoyo aun después de la emergencia sanitaria. La necesidad de reformulación del principal programa de protección social, para garantizar la continuidad de un ingreso básico a trabajadores informales desempleados o con ingresos insuficientes y a la vez atender a la sostenibilidad fiscal de la medida, abre una oportunidad para repensar aspectos de su diseño, implementación y articulación con las demás iniciativas existentes.

2. Objetivos

El objetivo de esta consultoría es generar un diagnóstico integral del sistema de protección social en Argentina que permita identificar huecos y superposiciones entre programas, y establecer una comparación con las mejores prácticas a nivel internacional. Éste será utilizado como insumo analítico para informar la toma de decisiones y la formulación de políticas sociales efectivas, eficientes, consistentes y sostenibles.

3. Alcance de los Servicios

Desde el inicio de la presente consultoría y hasta su consecución, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a través de sus órganos pertinentes, participará de todas las reuniones que en el marco de esta consultoría se generen y podrá generar las reuniones periódicas, sean estas presenciales, vía call y/o videollamada, que estime pertinentes con miras a garantizar el objetivo de la presente consultoría.

Asimismo, la firma responsable debe estar disponibles para mantener las reuniones que el MDS considere necesarias a fin de comunicar los resultados hallados como producto de la presente consultoría, tanto ante funcionarios del MDS como de los actores que éste considere pertinentes.

4. Actividades claves:

La firma consultora será responsable de realizar las siguientes actividades:

- a. Revisar estudios existentes sobre los programas de seguridad social en Argentina.
- b. Analizar la pertinencia del sistema de seguridad social según el menú de programas que ofrece en relación a las necesidades de la población objetivo.
- c. Examinar y evaluar los aspectos operativos de la prestación de los programas existentes (estructura organizacional de las unidades ejecutoras; sistemas; manuales, procesos y procedimientos; staff; reportes; mecanismos de monitoreo y evaluación, canales de comunicación; mecanismos de toma de decisiones, etc.).
- d. Evaluar la adecuación de los programas de seguridad social existentes en cuanto a su cobertura vs potenciales beneficiarios; y en relación al nivel y calidad de los servicios provistos.
- e. Detectar huecos y superposiciones de los diferentes programas existentes en lo relativo a cobertura, objetivos y destinatarios.
- f. Identificar y examinar la efectividad de los mecanismos de coordinación entre los diferentes programas.
- g. Evaluar la idoneidad del sistema de protección social existente en comparación con las mejores prácticas a nivel internacional.

Es esperable que la firma cuente con:

- Experiencia en la realización de estudios diagnósticos de sistemas de seguridad social de países de la región.
- Experiencia en el trabajo con organismos públicos.
- Experiencia en la comunicación de resultados de análisis diagnósticos.

El equipo sugerido para el Proyecto debe contar con un Especialista en análisis de Sistemas de Seguridad Social con las siguientes calificaciones:

- **Educación:** Título de maestría o equivalente en economía, ciencias sociales o un campo relacionado.
- **Experiencia:** no menos de 5 años de experiencia profesional comprobable en temas de diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas de desarrollo social en América Latina y el Caribe.
- **Idiomas:** Español e Inglés.
- **Habilidades:** paquetes estadísticos como Stata, R o SPSS.

5. Resultados y Productos esperados: El

contractual se compromete a entregar:

- **Producto 1:** Plan de trabajo.
- **Producto 2:** Propuesta metodológica.
- **Producto 3:** Informe de avance consistente en una versión preliminar del análisis que identifique los principales hallazgos.
- **Producto 4:** Informe final.

6. Calendario del Proyecto e Hitos:

ETAPA	MES					
	1	2	3	4	5	6
1. Elaboración del plan de trabajo						
2. Propuesta metodológica						
3. Informe de avance						
4. Informe final						

Los hitos del proyecto son:

- Plan general de trabajo validado por el MDS
- Propuesta metodológica validada por el MDS
- Informe de avance validado por el MDS
- Informe final validado por el MDS

7. Requisitos de los informes

En adición a los productos centrales descriptos, deberá presentarse una vez por mes y por escrito (durante la duración de la consultoría), informes sucintos de avance. Estos incluirán, básicamente lo siguiente: metas o resultados alcanzados, productos terminados, hallazgos o problemas encontrados, conclusiones, recomendaciones y presupuesto ejecutado. Los mismos serán consensuados con el MDS.

Deberán ser reportes del detalle de lo realizado a medida que se avanza en cada etapa que incluyan lecciones aprendidas y acciones de mejora a implementar y presente recomendaciones de acción.

El propósito de estos informes de avance es mantener la debida comunicación y coordinación entre las partes, de modo que la consultoría pueda ejecutarse conforme a los términos contratados.

8. Criterios de aceptación

Los informes deberán ser presentados de forma sistematizada y ordenada en soporte digital y estarán sujetos a la aprobación del Banco para ser considerados aceptados.

Muchos de los criterios de aceptación se irán definiendo a medida que se entreguen los informes sucintos de avance.

9. Otros requisitos

Se solicitará la firma de un convenio de confidencialidad de la información que se entregue durante la realización de las actividades y la información producida, una vez concluido el servicio. La entrega de los productos finales deberá incluir todas las bases de datos en formato electrónico generados en la elaboración de los análisis.

10. Supervisión e Informes

La Especialista Líder de la División de Salud y Protección Social, Ignez Tristao (SCL/SPH) será la responsable de la supervisión de esta consultoría.

11. Cronograma de pagos:

- Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos

que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

- La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Plan de Pagos	
<i>Entregables</i>	%
• Elaboración del plan general de trabajo	10%
• Elaboración de la propuesta metodológica	20%
• Informe de avance	30%
• Informe final	40%
TOTAL	100%

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para asistir en el diseño y cuantificación de los costos fiscales de la implementación de un programa de seguridad básica del ingreso en Argentina

Argentina

AR-T1253

Apoyo al Desarrollo de Políticas de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Argentina.

1. Antecedentes y Justificación

1.1. Resumen de los antecedentes

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o " Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

La recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de los pisos nacionales de protección social establece cuatro garantías básicas: (i) acceso a servicios de atención de salud esencial, (ii) seguridad básica del ingreso para los niños, que asegure acceso a la alimentación, educación y cuidados, (iii) seguridad básica del ingreso para personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes (por desempleo, subempleo, invalidez, u otros motivos), (iv) seguridad básica del ingreso para personas de edad. En el caso de la población en edad de trabajar, es necesario que las estrategias de extensión de la protección social se articulen con políticas para promover el empleo formal. El piso de protección puede pensarse como parte de un sistema integral: abarca las garantías básicas a las que accede toda la población y constituye la base sobre la que se desarrollan, por ejemplo, los seguros sociales que cubren a los trabajadores formales. Un aspecto que destaca la recomendación 202 es asegurar la sostenibilidad fiscal de los pisos de protección social.

En diciembre de 2020, el BID aprobará la Cooperación Técnica “Apoyo al Desarrollo de Políticas de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Argentina” (AR-T1256). El objetivo principal de esta cooperación técnica es apoyar en el desarrollo de insumos analíticos que puedan informar la toma de decisiones y la formulación de políticas sociales efectivas, eficientes, consistentes y sostenibles para garantizar un piso de ingreso a personas en edad, así como en el fortalecimiento de registros, sistemas de información e integración de bases de datos que permitan diseñar y monitorear la implementación de una estrategia de transferencias para avanzar hacia el piso protección social.

1.2. Justificación de la existencia de este proyecto

El gobierno nacional dispone de un conjunto programas no contributivos para garantizar la seguridad básica de un ingreso en la niñez (asignación universal por hijo, AUH y asignación universal por embarazo, AUE) y en la vejez (pensión universal para el adulto mayor, PUAM), así como de otros instrumentos de protección social para asegurar un piso de bienestar a personas en edad activa sin empleo formal y con ingresos insuficientes o en situación de

vulnerabilidad social. Algunos de esos instrumentos se implementaron en 2020 como respuesta a la emergencia social (ingreso familiar de emergencia, IFE o la tarjeta alimentar, TA) y otros forman parte del sistema de protección social surgido en los últimos diez años, como las pensiones no contributivas por invalidez (PNC), el programa Potenciar Trabajo (PT), o el programa Progresar.

En conjunto, los programas no contributivos destinados a garantizar un piso de ingreso a personas entre 18 y 65 años sin empleo formal tienen una cobertura importante: el IFE alcanza aproximadamente a 8,9 millones de trabajadores informales y cuentapropistas de bajos ingresos (categorías A y B), las PNC cubren a 1 millón de beneficiarios en situación de vulnerabilidad social e invalidez laboral, mientras que PT y Progresar tienen cerca de 500.000 titulares cada uno. A esto se suman otras iniciativas nacionales de menor alcance, que también apuntan a población adulta con dificultades para acceder a empleos o generar ingresos suficientes, como el programa de jóvenes por más y mejor trabajo (62.000 destinatarios), entre otros.

Como consecuencia del relajamiento de las medidas de aislamiento y la reapertura progresiva de actividades, así como la incipiente recuperación económica esperada para 2021 en el escenario post-COVID, parte de los beneficiarios actuales del IFE probablemente retome sus actividades laborales y ya no requieran de transferencias para alcanzar un piso de ingreso. Lo anterior supone un cambio respecto del contexto en el que se formuló el IFE. Sin embargo, la profundidad de la crisis y su alcance global implicarán impactos duraderos en el mercado de trabajo, por lo que un importante grupo de personas continuará necesitando apoyo aun después de la emergencia sanitaria. La necesidad de reformulación del principal programa de protección social, para garantizar la continuidad de un ingreso básico a trabajadores informales desempleados o con ingresos insuficientes y a la vez atender a la sostenibilidad fiscal de la medida, abre una oportunidad para repensar aspectos de su diseño, implementación y articulación con las demás iniciativas existentes.

2. Objetivos

El objetivo de esta consultoría es realizar un estudio analítico para dimensionar a la población objetivo de un programa de ingreso mínimo garantizado considerando distintas alternativas de focalización, estimaciones del costo fiscal de los escenarios planteados y posibles mecanismos de financiamiento en Argentina. El resultado de esta consultoría será utilizado como insumo analítico para informar la toma de decisiones y la formulación de políticas sociales efectivas, eficientes, consistentes y sostenibles.

3. Alcance de los Servicios

Desde el inicio de la presente consultoría y hasta su consecución, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a través de sus órganos pertinentes, participará de todas las reuniones que en el marco de esta consultoría se generen y podrá generar las reuniones periódicas, sean estas presenciales, vía call y/o videollamada, que estime pertinentes con miras a garantizar el objetivo de la presente consultoría.

Asimismo la firma responsable debe estar disponibles para mantener las reuniones que el MDS considere necesarias a fin de comunicar los resultados hallados como producto de la presente consultoría, tanto ante funcionarios del MDS como de los actores que éste considere pertinentes.

4. Actividades claves:

La firma consultora será responsable de realizar las siguientes actividades:

- a. Revisar la literatura existente sobre diseño y focalización de programas de ingreso mínimo garantizado para poblaciones vulnerables.
- b. Analizar el presupuesto actual asignado a este tipo de programas en el país en comparación con otros países, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo relativo.
- c. Definir mecanismos de identificación de potenciales beneficiarios.
- d. Evaluar la alternativa de identificación de beneficiarios más adecuada de acuerdo a los objetivos del programa a implementar.
- e. Caracterizar las necesidades de la población objetivo y posibles superposiciones con otros programas de protección social existentes.
- f. Desarrollar ejercicios analíticos para dimensionar la población objetivo en función a distintos mecanismos de focalización.
- g. Cuantificar el costo fiscal de los distintos escenarios planteados.
- h. Analizar diferentes mecanismos de financiamiento de los costos fiscales estimados de cada alternativa.
- i. Proponer, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, posibles formas de financiación del programa.

Es esperable que la firma cuente con:

- Experiencia en la realización de análisis de microsimulaciones y determinación de costos fiscales de medidas de protección social
- Experiencia en el trabajo con organismos públicos.
- Experiencia en la comunicación de resultados de análisis diagnósticos.

El equipo sugerido para el Proyecto debe contar con un Especialista en análisis de Sistemas de Seguridad Social con las siguientes calificaciones:

- **Educación:** Título de maestría o equivalente en economía, ciencias sociales o un campo relacionado.
- **Experiencia:** no menos de 5 años de experiencia profesional comprobable en temas de diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas de desarrollo social en América Latina y el Caribe.
- **Idiomas:** Español e Inglés.
- **Habilidades:** paquetes estadísticos como Stata, R o SPSS.

5. Resultados y productos esperados

El contractual se compromete a entregar:

- **Producto 1:** Plan de trabajo.
- **Producto 2:** Propuesta metodológica.
- **Producto 3:** Informe de avance con los resultados de los ejercicios de simulación sobre la dimensión potencial de la población objetivo del programa.
- **Producto 4:** Informe final.

6. Calendario del Proyecto e Hitos:

ETAPA	MES					
	1	2	3	4	5	6
1. Elaboración del plan de trabajo						
2. Propuesta metodológica						
3. Informe de avance						
4. Informe final						

Los hitos del proyecto son:

- Plan general de trabajo validado por el MDS
- Propuesta metodológica validada por el MDS
- Informe de avance validado por el MDS
- Informe final validado por el MDS

7. Requisitos de los informes

En adición a los productos centrales descriptos, deberá presentarse una vez por mes y por escrito (durante la duración de la consultoría), informes sucintos de avance. Estos incluirán, básicamente lo siguiente: metas o resultados alcanzados, productos terminados, hallazgos o problemas encontrados, conclusiones, recomendaciones y presupuesto ejecutado. Los mismos serán consensuados con el MDS.

Deberán ser reportes del detalle de lo realizado a medida que se avanza en cada etapa que incluyan lecciones aprendidas y acciones de mejora a implementar y presente recomendaciones de acción.

El propósito de estos informes de avance es mantener la debida comunicación y coordinación entre las partes, de modo que la consultoría pueda ejecutarse conforme a los términos contratados.

8. Criterios de aceptación

Los informes deberán ser presentados de forma sistematizada y ordenada en soporte digital y estarán sujetos a la aprobación del Banco para ser considerados aceptados.

Muchos de los criterios de aceptación se irán definiendo a medida que se entreguen los informes sucintos de avance.

9. Otros requisitos

Se solicitará la firma de un convenio de confidencialidad de la información que se entregue durante la realización de las actividades y la información producida, una vez concluido el servicio. La entrega de los productos finales deberá incluir todas las bases de datos en formato electrónico generados en la elaboración de los análisis.

10. Supervisión e Informes

La Especialista Líder de la División de Salud y Protección Social, Ignez Tristao (SCL/SPH) será la responsable de la supervisión de esta consultoría.

11. Cronograma de pagos:

- Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco

no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

- La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Plan de Pagos	
<i>Entregables</i>	%
• Elaboración del plan general de trabajo	10%
• Elaboración de la propuesta metodológica	20%
• Informe de avance	30%
• Informe final	40%
TOTAL	100%

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para asistir en el diseño de una propuesta de política de protección social para poblaciones vulnerables en Argentina

Argentina

AR-T1253

Apoyo al Desarrollo de Políticas de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Argentina.

1. Antecedentes y Justificación

1.1. Resumen de los antecedentes

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o " Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

La recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de los pisos nacionales de protección social establece cuatro garantías básicas: (i) acceso a servicios de atención de salud esencial, (ii) seguridad básica del ingreso para los niños, que asegure acceso a la alimentación, educación y cuidados, (iii) seguridad básica del ingreso para personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes (por desempleo, subempleo, invalidez, u otros motivos), (iv) seguridad básica del ingreso para personas de edad. En el caso de la población en edad de trabajar, es necesario que las estrategias de extensión de la protección social se articulen con políticas para promover el empleo formal. El piso de protección puede pensarse como parte de un sistema integral: abarca las garantías básicas a las que accede toda la población y constituye la base sobre la que se desarrollan, por ejemplo, los seguros sociales que cubren a los trabajadores formales. Un aspecto que destaca la recomendación 202 es asegurar la sostenibilidad fiscal de los pisos de protección social.

En diciembre de 2020, el BID aprobará la Cooperación Técnica “Apoyo al Desarrollo de Políticas de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Argentina” (AR-T1256). El objetivo principal de esta cooperación técnica es apoyar en el desarrollo de insumos analíticos que puedan informar la toma de decisiones y la formulación de políticas sociales efectivas, eficientes, consistentes y sostenibles para garantizar un piso de ingreso a personas en edad, así como en el fortalecimiento de registros, sistemas de información e integración de bases de datos que permitan diseñar y monitorear la implementación de una estrategia de transferencias para avanzar hacia el piso protección social.

1.2. Justificación de la existencia de este proyecto

El gobierno nacional dispone de un conjunto programas no contributivos para garantizar la seguridad básica de un ingreso en la niñez (asignación universal por hijo, AUH y asignación universal por embarazo, AUE) y en la vejez (pensión universal para el adulto mayor, PUAM), así como de otros instrumentos de protección social para asegurar un piso de bienestar a personas en edad activa sin empleo formal y con ingresos insuficientes o en situación de vulnerabilidad social. Algunos de esos instrumentos se implementaron en 2020 como respuesta

a la emergencia social (ingreso familiar de emergencia, IFE o la tarjeta alimentar, TA) y otros forman parte del sistema de protección social surgido en los últimos diez años, como las pensiones no contributivas por invalidez (PNC), el programa Potenciar Trabajo (PT), o el programa Progresar.

En conjunto, los programas no contributivos destinados a garantizar un piso de ingreso a personas entre 18 y 65 años sin empleo formal tienen una cobertura importante: el IFE alcanza aproximadamente a 8,9 millones de trabajadores informales y cuentapropistas de bajos ingresos (categorías A y B), las PNC cubren a 1 millón de beneficiarios en situación de vulnerabilidad social e invalidez laboral, mientras que PT y Progresar tienen cerca de 500.000 titulares cada uno. A esto se suman otras iniciativas nacionales de menor alcance, que también apuntan a población adulta con dificultades para acceder a empleos o generar ingresos suficientes, como el programa de jóvenes por más y mejor trabajo (62.000 destinatarios), entre otros.

Como consecuencia del relajamiento de las medidas de aislamiento y la reapertura progresiva de actividades, así como la incipiente recuperación económica esperada para 2021 en el escenario post-COVID, parte de los beneficiarios actuales del IFE probablemente retome sus actividades laborales y ya no requieran de transferencias para alcanzar un piso de ingreso. Lo anterior supone un cambio respecto del contexto en el que se formuló el IFE. Sin embargo, la profundidad de la crisis y su alcance global implicarán impactos duraderos en el mercado de trabajo, por lo que un importante grupo de personas continuará necesitando apoyo aun después de la emergencia sanitaria. La necesidad de reformulación del principal programa de protección social, para garantizar la continuidad de un ingreso básico a trabajadores informales desempleados o con ingresos insuficientes y a la vez atender a la sostenibilidad fiscal de la medida, abre una oportunidad para repensar aspectos de su diseño, implementación y articulación con las demás iniciativas existentes.

2. Objetivos

El objetivo de esta consultoría es desarrollar una propuesta de política que logre una adecuada articulación del programa de ingreso mínimo garantizado con otros programas, tanto para la prestación de servicios destinados a promover la generación de ingreso autónomo (capacitación, comercialización, financieros) como desde el punto de vista de la consolidación de información, integración de bases de datos y utilización de medios de pago. El resultado de esta consultoría contribuirá a la formulación de políticas sociales efectivas, eficientes, consistentes y sostenibles.

3. Alcance de los Servicios

Desde el inicio de la presente consultoría y hasta su consecución, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a través de sus órganos pertinentes, participará de todas las reuniones que en el marco de esta consultoría se generen y podrá generar las reuniones periódicas, sean estas presenciales, vía call y/o videollamada, que estime pertinentes con miras a garantizar el objetivo de la presente consultoría.

Asimismo la firma responsable debe estar disponibles para mantener las reuniones que el MDS considere necesarias a fin de comunicar los resultados hallados como producto de la presente consultoría, tanto ante funcionarios del MDS como de los actores que éste considere pertinentes.

4. Actividades claves:

La firma consultora será responsable de realizar las siguientes actividades:

- a. Revisar la literatura existente y las mejores prácticas internacionales sobre diseño e implementación de políticas de protección social para poblaciones vulnerables.
- b. Realizar un mapeo exhaustivo de todos los programas existentes en Argentina vinculados a la protección social de la población, estudiando la interrelación entre éstos y los organismos encargados de su implementación.
- c. Definir las características esenciales que debería tener un sistema de información consolidado de los programas de protección social para poblaciones vulnerables y proponer un diseño posible.
- d. Organizar talleres con actores claves que servirán de insumo para la formulación participativa de una teoría del cambio que sustente el diseño e implementación de una política de protección social integral.
- e. Elaborar una propuesta preliminar de política que apoye el fortalecimiento de la integralidad de las políticas de protección social en Argentina.
- f. Redactar una hoja de ruta para la puesta en marcha e implementación de la política diseñada, detallando las etapas concretas necesarias para la implementación y los mecanismos e hitos operativos requeridos para ello.

Es esperable que la firma cuente con:

- Experiencia en el diseño de políticas públicas con eje en programas sociales en la región de América Latina y el Caribe.
- Experiencia en el trabajo con organismos públicos.
- Experiencia en la comunicación de resultados de análisis diagnósticos.

El equipo sugerido para el Proyecto debe contar con un Especialista senior en análisis de Sistemas de Seguridad Social con las siguientes calificaciones:

- **Educación:** Título de maestría o equivalente en economía, ciencias sociales o un campo relacionado.
- **Experiencia:** no menos de 10 años de experiencia profesional comprobable en temas de diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas de desarrollo social en América Latina y el Caribe.
- **Idiomas:** Español e Inglés.

5. Resultados y productos esperables: El

contractual se compromete a entregar:

- **Producto 1:** Plan de trabajo
- **Producto 2:** Propuesta metodológica.
- **Producto 3:** Informe de avance con un detalle de las actividades realizadas y los resultados preliminares alcanzados.
- **Producto 4:** Informe final que contenga la propuesta de política diseñada y una hoja de ruta para la implementación de la misma.

6. Calendario del Proyecto e Hitos:

ETAPA	MES					
	1	2	3	4	5	6
1. Elaboración del plan de trabajo						
2. Propuesta metodológica						
3. Informe de avance						
4. Informe final						

Los hitos del proyecto son:

- Plan general de trabajo validado por el MDS
- Propuesta metodológica validada por el MDS
- Informe de avance validado por el MDS
- Informe final validado por el MDS

7. Requisitos de los informes

En adición a los productos centrales descritos, deberá presentarse una vez por mes y por escrito (durante la duración de la consultoría), informes sucintos de avance. Estos incluirán, básicamente lo siguiente: metas o resultados alcanzados, productos terminados, hallazgos o problemas encontrados, conclusiones, recomendaciones y presupuesto ejecutado. Los mismos serán consensuados con el MDS.

Deberán ser reportes del detalle de lo realizado a medida que se avanza en cada etapa que incluyan lecciones aprendidas y acciones de mejora a implementar y presente recomendaciones de acción.

El propósito de estos informes de avance es mantener la debida comunicación y coordinación entre las partes, de modo que la consultoría pueda ejecutarse conforme a los términos contratados.

8. Criterios de aceptación

Los informes deberán ser presentados de forma sistematizada y ordenada en soporte digital y estarán sujetos a la aprobación del Banco para ser considerados aceptados.

Muchos de los criterios de aceptación se irán definiendo a medida que se entreguen los informes sucintos de avance.

9. Otros requisitos

Se solicitará la firma de un convenio de confidencialidad de la información que se entregue durante la realización de las actividades y la información producida, una vez concluido el servicio. La entrega de los productos finales deberá incluir todas las bases de datos en formato electrónico generados en la elaboración de los análisis.

10. Supervisión e Informes

La Especialista Líder de la División de Salud y Protección Social, Ignez Tristao (SCL/SPH) será la responsable de la supervisión de esta consultoría.

11. Cronograma de pagos:

- Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.
- La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Plan de Pagos	
<i>Entregables</i>	%
• Elaboración del plan general de trabajo	10%
• Elaboración de la propuesta metodológica	20%
• Informe de avance	30%
• Informe final	40%
TOTAL	100%

Consultoría de análisis normativo para la implementación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATREP)

Contexto de la búsqueda:

El gobierno nacional dispone de un conjunto programas no contributivos para garantizar la seguridad básica de un ingreso en la niñez (asignación universal por hijo, AUH y asignación universal por embarazo, AUE) y en la vejez (pensión universal para el adulto mayor, PUAM), así como de otros instrumentos de protección social para asegurar un piso de bienestar a personas en edad activa sin empleo formal y con ingresos insuficientes o en situación de vulnerabilidad social. Algunos de esos instrumentos se implementaron en 2020 como respuesta a la emergencia social (ingreso familiar de emergencia, IFE o la tarjeta alimentar, TA) y otros forman parte del sistema de protección social surgido en los últimos diez años, como las pensiones no contributivas por invalidez (PNC), el programa Potenciar Trabajo (PT), o el programa Progresar.

En conjunto, los programas no contributivos destinados a garantizar un piso de ingreso a personas entre 18 y 65 años sin empleo formal tienen una cobertura importante: el IFE alcanza aproximadamente a 8,9 millones de trabajadores informales y cuentapropistas de bajos ingresos (categorías A y B), las PNC cubren a 1 millón de beneficiarios en situación de vulnerabilidad social e invalidez laboral, mientras que PT y Progresar tienen cerca de 500.000 titulares cada uno. A esto se suman otras iniciativas nacionales de menor alcance, que también apuntan a población adulta con dificultades para acceder a empleos o generar ingresos suficientes, como el programa de jóvenes por más y mejor trabajo (62.000 destinatarios), entre otros.

Como consecuencia del relajamiento de las medidas de aislamiento y la reapertura progresiva de actividades, así como la incipiente recuperación económica esperada para 2021 en el escenario post-COVID, parte de los beneficiarios actuales del IFE probablemente retome sus actividades laborales y ya no requieran de transferencias para alcanzar un piso de ingreso. Lo anterior supone un cambio respecto del contexto en el que se formuló el IFE. Sin embargo, la profundidad de la crisis y su alcance global implicarán impactos duraderos en el mercado de trabajo, por lo que un importante grupo de personas continuará necesitando apoyo aun después de la emergencia sanitaria. La necesidad de reformulación del principal programa de protección social, para garantizar la continuidad de un ingreso básico a trabajadores informales desempleados o con ingresos insuficientes y a la vez atender a la sostenibilidad fiscal de la medida, abre una oportunidad para repensar aspectos de su diseño, implementación y articulación con las demás iniciativas existentes.

En este sentido, una de las iniciativas recientes del MDS es la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATREP). El RENATREP creará un registro de trabajadores informales, con el objetivo de promover acciones que permitan la progresiva regularización de su actividad, el acceso a servicios financieros, de capacitación, comercialización y otros programas de acompañamiento destinados a mejorar la productividad de sus actividades. Esta herramienta podrá servir como base para la construcción del perfil laboral actualizado de los y las trabajadores y articular un conjunto de servicios destinados a mejorar la trayectoria laboral y los niveles de protección de los trabajadores.

La misión del equipo:

El Sector Social (SCL) cuenta con un equipo multidisciplinario convencido de que invertir en la gente es el camino para mejorar vidas y superar los desafíos del desarrollo de América Latina y el Caribe. Junto con los países de la región, el Sector Social construye soluciones de política

pública para reducir la pobreza y para mejorar los servicios de educación, trabajo, protección social y salud que los ciudadanos reciben. El trabajo del Sector tiene como objetivo impulsar una región más productiva con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con una mayor inclusión de las poblaciones más vulnerables. La División de Protección Social y Salud (SPH) tiene encomendada la preparación y supervisión de las operaciones del BID en los países miembros prestatarios en los ámbitos de la protección social (redes de seguridad y transferencias y servicios de inclusión social que incluyen: temprano desarrollo infantil, programas juveniles, servicios de atención, y otros), salud (estrategias de inversión de capital de salud, fortalecimiento de redes de salud, financiamiento del sistema de salud, organización y desempeño, etc.) y nutrición.

Lo que harás: El objetivo de esta consultoría es realizar un diagnóstico normativo para identificar los cambios regulatorios necesarios para la implementación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATREP). Se espera por medio de esta herramienta regularizar la actividad y focalizar mejor las acciones dirigidas a estos trabajadores informales.

El consultor será responsable de realizar las siguientes actividades:

- Analizar el marco regulatorio vigente a nivel nacional sobre el manejo de datos personales de la población por parte de organismos públicos.
- Identificar el conjunto de normas y regulaciones vigentes que pudieran presentar un obstáculo para la constitución y normal operación del RENATREP.
- Definir cuáles serían los cambios en la normativa potencialmente necesarios para poder implementar el RENATREP y garantizar su óptimo funcionamiento.
- Proponer diferentes alternativas para la introducción de los cambios normativos que pudieran necesitarse para la implementación y operación del RENATREP
- Realizar un análisis de factibilidad técnica y política de cada una de las alternativas propuestas.

Entregables y Cronograma de pagos:

El contractual se compromete a entregar:

- **Producto 1:** Plan de trabajo.
- **Producto 2:** Informe de avance con un resumen de la normativa vigente sobre el tema en cuestión.
- **Producto 3:** Informe final.

Cronograma de pagos:

- 30% a la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 1.
- 30% a la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 2.
- 40% a la entrega y aprobación por parte del Banco del Producto 3.

Lo que necesitarás:

- **Ciudadanía:** Eres ciudadano/a de Argentina o ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros con permiso legal o de residencia para trabajar en Argentina.
- **Consanguinidad:** no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.
- **Educación:** Abogado, especialista en leyes de protección de datos.
- **Experiencia:** más de 5 años de experiencia profesional, con especialización en normativas vinculadas a leyes de protección de datos, ciberseguridad, violación de la privacidad y gestión de información a través de redes sociales, e-commerce y transacciones económicas y de información realizadas en las redes.

- **Idiomas:** español e Inglés.

Competencias Generales y Técnicas:

Con competencias en:

- Análisis de leyes y normativas.
- Orientación y asesoramiento experto sobre temas técnicos, relacionados con sistemas o procesos legales.
- Excelentes habilidades de relacionamiento y comunicación oral y escrito.

Resumen de la oportunidad:

Tipo de contrato y modalidad: Consultor Productos y Servicios Externos (PEC)

Duración del contrato: 6 meses

- **Fecha de inicio:** marzo 2021
- **Ubicación:** Argentina
- **Persona responsable:** Ignez Tristao, Especialista Sectorial SCL/SPH
- **Requisitos:** Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.

Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con discapacidades a postularse.

Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.

Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para el diseño de procesos para la implementación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATREP)

Argentina

AR-T1253

Apoyo al Desarrollo de Políticas de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Argentina

1. Antecedentes y Justificación

1.1. Resumen de los antecedentes

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o " Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

La recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de los pisos nacionales de protección social establece cuatro garantías básicas: (i) acceso a servicios de atención de salud esencial, (ii) seguridad básica del ingreso para los niños, que asegure acceso a la alimentación, educación y cuidados, (iii) seguridad básica del ingreso para personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes (por desempleo, subempleo, invalidez, u otros motivos), (iv) seguridad básica del ingreso para personas de edad. En el caso de la población en edad de trabajar, es necesario que las estrategias de extensión de la protección social se articulen con políticas para promover el empleo formal. El piso de protección puede pensarse como parte de un sistema integral: abarca las garantías básicas a las que accede toda la población y constituye la base sobre la que se desarrollan, por ejemplo, los seguros sociales que cubren a los trabajadores formales. Un aspecto que destaca la recomendación 202 es asegurar la sostenibilidad fiscal de los pisos de protección social.

En diciembre de 2020, el BID aprobará la Cooperación Técnica “Apoyo al Desarrollo de Políticas de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Argentina” (AR-T1256). El objetivo principal de esta cooperación técnica es apoyar en el desarrollo de insumos analíticos que puedan informar la toma de decisiones y la formulación de políticas sociales efectivas, eficientes, consistentes y sostenibles para garantizar un piso de ingreso a personas en edad, así como en el fortalecimiento de registros, sistemas de información e integración de bases de datos que permitan diseñar y monitorear la implementación de una estrategia de transferencias para avanzar hacia el piso protección social.

1.2. Justificación de la existencia de este proyecto

El gobierno nacional dispone de un conjunto programas no contributivos para garantizar la seguridad básica de un ingreso en la niñez (asignación universal por hijo, AUH y asignación universal por embarazo, AUE) y en la vejez (pensión universal para el adulto mayor, PUAM), así como de otros instrumentos de protección social para asegurar un piso de bienestar a personas en edad activa sin empleo formal y con ingresos insuficientes o en situación de

vulnerabilidad social. Algunos de esos instrumentos se implementaron en 2020 como respuesta a la emergencia social (ingreso familiar de emergencia, IFE o la tarjeta alimentar, TA) y otros forman parte del sistema de protección social surgido en los últimos diez años, como las pensiones no contributivas por invalidez (PNC), el programa Potenciar Trabajo (PT), o el programa Progresar.

En conjunto, los programas no contributivos destinados a garantizar un piso de ingreso a personas entre 18 y 65 años sin empleo formal tienen una cobertura importante: el IFE alcanza aproximadamente a 8,9 millones de trabajadores informales y cuentapropistas de bajos ingresos (categorías A y B), las PNC cubren a 1 millón de beneficiarios en situación de vulnerabilidad social e invalidez laboral, mientras que PT y Progresar tienen cerca de 500.000 titulares cada uno. A esto se suman otras iniciativas nacionales de menor alcance, que también apuntan a población adulta con dificultades para acceder a empleos o generar ingresos suficientes, como el programa de jóvenes por más y mejor trabajo (62.000 destinatarios), entre otros.

Como consecuencia del relajamiento de las medidas de aislamiento y la reapertura progresiva de actividades, así como la incipiente recuperación económica esperada para 2021 en el escenario post-COVID, parte de los beneficiarios actuales del IFE probablemente retome sus actividades laborales y ya no requieran de transferencias para alcanzar un piso de ingreso. Lo anterior supone un cambio respecto del contexto en el que se formuló el IFE. Sin embargo, la profundidad de la crisis y su alcance global implicarán impactos duraderos en el mercado de trabajo, por lo que un importante grupo de personas continuará necesitando apoyo aun después de la emergencia sanitaria. La necesidad de reformulación del principal programa de protección social, para garantizar la continuidad de un ingreso básico a trabajadores informales desempleados o con ingresos insuficientes y a la vez atender a la sostenibilidad fiscal de la medida, abre una oportunidad para repensar aspectos de su diseño, implementación y articulación con las demás iniciativas existentes.

En este sentido, una de las iniciativas recientes del MDS es la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATREP). El RENATREP creará un registro de trabajadores informales, con el objetivo de promover acciones que permitan la progresiva regularización de su actividad, el acceso a servicios financieros, de capacitación, comercialización y otros programas de acompañamiento destinados a mejorar la productividad de sus actividades. Esta herramienta podrá servir como base para la construcción del perfil laboral actualizado de los y las trabajadores y articular un conjunto de servicios destinados a mejorar la trayectoria laboral y los niveles de protección de los trabajadores.

2. Objetivos

El objetivo de esta consultoría es realizar un análisis de los procesos operativos involucrados en la gestión del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATREP). Se espera por medio de este registro regularizar la actividad y focalizar mejor las acciones dirigidas a estos trabajadores informales.

3. Alcance de los Servicios

Desde el inicio de la presente consultoría y hasta su consecución, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a través de sus órganos pertinentes, participará de todas las reuniones que en el marco de esta consultoría se generen y podrá generar las reuniones periódicas, sean estas

presenciales, vía call y/o videollamada, que estime pertinentes con miras a garantizar el objetivo de la presente consultoría.

Asimismo la firma responsable debe estar disponibles para mantener las reuniones que el MDS considere necesarias a fin de comunicar los resultados hallados como producto de la presente consultoría, tanto ante funcionarios del MDS como de los actores que éste considere pertinentes.

4. Actividades claves:

La firma consultora será responsable de realizar las siguientes actividades:

- a. Identificar los hitos principales para la creación e implementación del RENATREP, incluyendo plazos estimados para cada hito identificado.
- b. Definir detalladamente los procesos requeridos para implementar el registro, incluyendo detalle de responsables, plazos y recursos necesarios para la implementación de cada proceso.
- c. Diseñar el mecanismo y las herramientas para el seguimiento y medición de avances para la implementación.
- d. Validar y comunicar el diseño de procesos con todos los actores relevantes.

Es esperable que la firma cuente con:

- Experiencia en el diseño de procesos y flujos de trabajos en organizaciones.
- Experiencia en el trabajo con organismos públicos.
- Experiencia en la comunicación de resultados de análisis diagnósticos.

El equipo sugerido para el Proyecto debe contar con un Especialista senior en análisis de Sistemas de Seguridad Social con las siguientes calificaciones:

- **Educación:** Título de maestría o equivalente en ingeniería, administración de empresas, economía o un campo relacionado.
- **Experiencia:** no menos de 5 años de experiencia profesional comprobable en temas de análisis organizacional y análisis y optimización de procesos. Conocimiento en Business Process Modeling Notation (BPMN) o metodologías similares de análisis de procesos.
- **Idiomas:** Español e Inglés.

5. Resultados y productos esperables: El

contractual se compromete a entregar:

- **Producto 1:** Plan de trabajo.
- **Producto 2:** Propuesta metodológica.
- **Producto 3:** Informe de avance con un esquema preliminar de los procesos requeridos para el diseño e implementación del RENATREP.
- **Producto 4:** Informe final.

6. Calendario del Proyecto e Hitos:

ETAPA	MES					
	1	2	3	4	5	6
1. Elaboración del plan de trabajo						
2. Propuesta metodológica						
3. Informe de avance						
4. Informe final						

Los hitos del proyecto son:

- Plan general de trabajo validado por el MDS
- Propuesta metodológica validada por el MDS
- Informe de avance validado por el MDS
- Informe final validado por el MDS

7. Requisitos de los informes

En adición a los productos centrales descriptos, deberá presentarse una vez por mes y por escrito (durante la duración de la consultoría), informes sucintos de avance. Estos incluirán, básicamente lo siguiente: metas o resultados alcanzados, productos terminados, hallazgos o problemas encontrados, conclusiones, recomendaciones y presupuesto ejecutado. Los mismos serán consensuados con el MDS.

Deberán ser reportes del detalle de lo realizado a medida que se avanza en cada etapa que incluyan lecciones aprendidas y acciones de mejora a implementar y presente recomendaciones de acción.

El propósito de estos informes de avance es mantener la debida comunicación y coordinación entre las partes, de modo que la consultoría pueda ejecutarse conforme a los términos contratados.

8. Criterios de aceptación

Los informes deberán ser presentados de forma sistematizada y ordenada en soporte digital y estarán sujetos a la aprobación del Banco para ser considerados aceptados.

Muchos de los criterios de aceptación se irán definiendo a medida que se entreguen los informes sucintos de avance.

9. Otros requisitos

Se solicitará la firma de un convenio de confidencialidad de la información que se entregue durante la realización de las actividades y la información producida, una vez concluido el servicio. La entrega de los productos finales deberá incluir todas las bases de datos en formato electrónico generados en la elaboración de los análisis.

10. Supervisión e Informes

La Especialista Líder de la División de Salud y Protección Social, Ignez Tristao (SCL/SPH) será la responsable de la supervisión de esta consultoría.

11. Cronograma de pagos:

- Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.
- La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Plan de Pagos	
<i>Entregables</i>	%
• Elaboración del plan general de trabajo	10%
• Elaboración de la propuesta metodológica	20%
• Informe de avance	30%
• Informe final	40%
TOTAL	100%

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para el diseño de sistemas y herramientas de gestión del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATREP)

Argentina

AR-T1253

Apoyo al Desarrollo de Políticas de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Argentina

1. Antecedentes y Justificación

1.1. Resumen de los antecedentes

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o " Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

La recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de los pisos nacionales de protección social establece cuatro garantías básicas: (i) acceso a servicios de atención de salud esencial, (ii) seguridad básica del ingreso para los niños, que asegure acceso a la alimentación, educación y cuidados, (iii) seguridad básica del ingreso para personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes (por desempleo, subempleo, invalidez, u otros motivos), (iv) seguridad básica del ingreso para personas de edad. En el caso de la población en edad de trabajar, es necesario que las estrategias de extensión de la protección social se articulen con políticas para promover el empleo formal. El piso de protección puede pensarse como parte de un sistema integral: abarca las garantías básicas a las que accede toda la población y constituye la base sobre la que se desarrollan, por ejemplo, los seguros sociales que cubren a los trabajadores formales. Un aspecto que destaca la recomendación 202 es asegurar la sostenibilidad fiscal de los pisos de protección social.

En diciembre de 2020, el BID aprobará la Cooperación Técnica “Apoyo al Desarrollo de Políticas de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Argentina” (AR-T1256). El objetivo principal de esta cooperación técnica es apoyar en el desarrollo de insumos analíticos que puedan informar la toma de decisiones y la formulación de políticas sociales efectivas, eficientes, consistentes y sostenibles para garantizar un piso de ingreso a personas en edad, así como en el fortalecimiento de registros, sistemas de información e integración de bases de datos que permitan diseñar y monitorear la implementación de una estrategia de transferencias para avanzar hacia el piso protección social.

1.2. Justificación de la existencia de este proyecto

El gobierno nacional dispone de un conjunto programas no contributivos para garantizar la seguridad básica de un ingreso en la niñez (asignación universal por hijo, AUH y asignación universal por embarazo, AUE) y en la vejez (pensión universal para el adulto mayor, PUAM), así como de otros instrumentos de protección social para asegurar un piso de bienestar a personas en edad activa sin empleo formal y con ingresos insuficientes o en situación de

vulnerabilidad social. Algunos de esos instrumentos se implementaron en 2020 como respuesta a la emergencia social (ingreso familiar de emergencia, IFE o la tarjeta alimentar, TA) y otros forman parte del sistema de protección social surgido en los últimos diez años, como las pensiones no contributivas por invalidez (PNC), el programa Potenciar Trabajo (PT), o el programa Progresar.

En conjunto, los programas no contributivos destinados a garantizar un piso de ingreso a personas entre 18 y 65 años sin empleo formal tienen una cobertura importante: el IFE alcanza aproximadamente a 8,9 millones de trabajadores informales y cuentapropistas de bajos ingresos (categorías A y B), las PNC cubren a 1 millón de beneficiarios en situación de vulnerabilidad social e invalidez laboral, mientras que PT y Progresar tienen cerca de 500.000 titulares cada uno. A esto se suman otras iniciativas nacionales de menor alcance, que también apuntan a población adulta con dificultades para acceder a empleos o generar ingresos suficientes, como el programa de jóvenes por más y mejor trabajo (62.000 destinatarios), entre otros.

Como consecuencia del relajamiento de las medidas de aislamiento y la reapertura progresiva de actividades, así como la incipiente recuperación económica esperada para 2021 en el escenario post-COVID, parte de los beneficiarios actuales del IFE probablemente retome sus actividades laborales y ya no requieran de transferencias para alcanzar un piso de ingreso. Lo anterior supone un cambio respecto del contexto en el que se formuló el IFE. Sin embargo, la profundidad de la crisis y su alcance global implicarán impactos duraderos en el mercado de trabajo, por lo que un importante grupo de personas continuará necesitando apoyo aun después de la emergencia sanitaria. La necesidad de reformulación del principal programa de protección social, para garantizar la continuidad de un ingreso básico a trabajadores informales desempleados o con ingresos insuficientes y a la vez atender a la sostenibilidad fiscal de la medida, abre una oportunidad para repensar aspectos de su diseño, implementación y articulación con las demás iniciativas existentes.

En este sentido, una de las iniciativas recientes del MDS es la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATREP). El RENATREP creará un registro de trabajadores informales, con el objetivo de promover acciones que permitan la progresiva regularización de su actividad, el acceso a servicios financieros, de capacitación, comercialización y otros programas de acompañamiento destinados a mejorar la productividad de sus actividades. Esta herramienta podrá servir como base para la construcción del perfil laboral actualizado de los y las trabajadores y articular un conjunto de servicios destinados a mejorar la trayectoria laboral y los niveles de protección de los trabajadores.

2. Objetivos

El objetivo de esta consultoría es diseñar el sistema de información y la nueva base de datos del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATREP). Se espera por medio de este registro regularizar la actividad y focalizar mejor las acciones dirigidas a estos trabajadores informales.

3. Alcance de los Servicios

Desde el inicio de la presente consultoría y hasta su consecución, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a través de sus órganos pertinentes, participará de todas las reuniones que en el marco de esta consultoría se generen y podrá generar las reuniones periódicas, sean estas

presenciales, vía call y/o videollamada, que estime pertinentes con miras a garantizar el objetivo de la presente consultoría.

Asimismo la firma responsable debe estar disponibles para mantener las reuniones que el MDS considere necesarias a fin de comunicar los resultados hallados como producto de la presente consultoría, tanto ante funcionarios del MDS como de los actores que éste considere pertinentes.

4. Actividades claves:

La firma consultora será responsable de realizar las siguientes actividades:

- a. Definir y validar la arquitectura del sistema de información y base de datos del RENATREP.
- b. Diseñar el formulario web, el tablero de control y la base de datos.
- c. Definir y acordar con los actores relevantes estándares de calidad para todos los componentes del sistema.
- d. Coordinar y supervisar el trabajo de todos los responsables involucrados para asegurar la implementación efectiva y la calidad a lo largo de todos los procesos.
- e. Poblar el registro con los datos y asegurar su actualización permanente.
- f. Asegurar el funcionamiento óptimo y el mantenimiento periódico del registro y sus componentes.
- g. Organizar y liderar reuniones periódicas de seguimiento para monitorear el avance y resolver potenciales obstáculos identificados.
- h. Mantener interacciones de forma frecuente y proactiva con los diferentes actores relevantes para asegurar una comunicación efectiva.
- i. Ayudar a destrabar potenciales conflictos y transmitir potenciales necesidades adicionales o ajustes requeridos al plan establecido.
- j. Asegurar que se cumplan los estándares acordados en los productos finales que componen el RENATREP.

Es esperable que la firma cuente con:

- Experiencia en arquitectura de sistemas, relevamiento de procesos y transformación digital.
- Experiencia en gestión integral de datos, Data warehouse, analytics, Business Intelligence, data cleansing, data visualization
- Experiencia en interoperabilidad y capacidades tecnologías de desarrollo en múltiples bases de datos, web services APIs.
- Experiencia en el trabajo con organismos públicos.

El equipo sugerido para el Proyecto debe contar con un Especialista senior en análisis de Sistemas de Seguridad Social con las siguientes calificaciones:

- **Educación:** Título de ingeniería industrial, Economía o afines.
- **Experiencia:** no menos de 5 años de experiencia profesional relacionada al análisis organizacional y análisis y optimización de procesos.
- **Idiomas:** Español e Inglés.

5. Resultados y productos esperables: El

contractual se compromete a entregar:

- **Producto 1:** Plan de trabajo
- **Producto 2:** Propuesta metodológica.
- **Producto 3:** Informe de avance con arquitectura del sistema de información y base de datos del RENATREP validada e implementada.
- **Producto 4:** Base de datos RENATREP completa y actualizada.

12. Calendario del Proyecto e Hitos:

ETAPA	MES					
	1	2	3	4	5	6
1. Elaboración del plan de trabajo						
2. Propuesta metodológica						
3. Informe de avance						
4. Base de datos RENATREP						

Los hitos del proyecto son:

- Plan general de trabajo validado por el MDS
- Propuesta metodológica validada por el MDS
- Informe de avance validado por el MDS
- Base de datos RENATREP completa y actualizada validada por el MDS

13. Requisitos de los informes

En adición a los productos centrales descriptos, deberá presentarse una vez por mes y por escrito (durante la duración de la consultoría), informes sucintos de avance. Estos incluirán, básicamente lo siguiente: metas o resultados alcanzados, productos terminados, hallazgos o problemas encontrados, conclusiones, recomendaciones y presupuesto ejecutado. Los mismos serán consensuados con el MDS.

Deberán ser reportes del detalle de lo realizado a medida que se avanza en cada etapa que incluyan lecciones aprendidas y acciones de mejora a implementar y presente recomendaciones de acción.

El propósito de estos informes de avance es mantener la debida comunicación y coordinación entre las partes, de modo que la consultoría pueda ejecutarse conforme a los términos contratados.

14. Criterios de aceptación

Los informes deberán ser presentados de forma sistematizada y ordenada en soporte digital y estarán sujetos a la aprobación del Banco para ser considerados aceptados.

Muchos de los criterios de aceptación se irán definiendo a medida que se entreguen los informes sucintos de avance.

15. Otros requisitos

Se solicitará la firma de un convenio de confidencialidad de la información que se entregue durante la realización de las actividades y la información producida, una vez concluido el servicio. La entrega de los productos finales deberá incluir todas las bases de datos en formato electrónico

generados en la elaboración de los análisis.

16. Supervisión e Informes

La Especialista Líder de la División de Salud y Protección Social, Ignez Tristao (SCL/SPH) será la responsable de la supervisión de esta consultoría.

17. Cronograma de pagos:

- Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.
- La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Plan de Pagos	
<i>Entregables</i>	%
• Elaboración del plan general de trabajo	10%
• Elaboración de la propuesta metodológica	20%
• Informe de avance	30%
• Base de datos RENATREP	40%
TOTAL	100%